



REGIÓN DE MURCIA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

**PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO SUPERIOR DE
ADMINISTRADORES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA.**

SISTEMA: PROMOCIÓN INTERNA

Orden de 4 de noviembre de 2015 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante promoción interna, 10 plazas del Cuerpo Superior de Administradores de la Administración Pública Regional (BORM nº 266 de 17 de noviembre de 2015) CÓDIGO: AGXOOP-0

DURACIÓN DEL EJERCICIO: 150 MINUTOS.

OPCIÓN JURÍDICA (TIPO EXAMEN 1)

HORA: 10:00

MURCIA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016



CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES (PROMOCIÓN INTERNA) - OPCIÓN JURÍDICA

1. Según lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Española, el Decreto-Ley no podrá afectar a: (Señale la respuesta INCORRECTA)

- a) Al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
- b) A materias tributarias o de carácter internacional.
- c) A los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución.
- d) Al ordenamiento de las instituciones básicas del estado.

2. En relación con los Decretos Legislativos, de acuerdo con el artículo 82 de la Constitución, la delegación legislativa deberá otorgarse:

- a) De forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio.
- b) Para varias materias conexas y con plazos máximos para su ejercicio.
- c) Mediante una Ley orgánica de delegación.
- d) Mediante una autorización de las Cortes Generales.

3. Según García de Enterría, ¿cuál de las siguientes NO es una nota del Derecho Administrativo?

- a) Es un Derecho Público.
- b) Es el Derecho común de las Administraciones Públicas.
- c) La presencia de una Administración es requisito necesario para que exista una relación jurídico-administrativa.
- d) La presencia de un sujeto privado es requisito necesario para que exista una relación jurídico-administrativa.

4. En relación con el control jurisdiccional de la Administración, de acuerdo con el artículo 106 de la Constitución, los tribunales NO controlarán:

- a) La potestad reglamentaria.
- b) La legalidad de la actuación administrativa.
- c) El sometimiento de la Administración a los fines que la justifican.
- d) La incompatibilidad de los miembros del Gobierno.

5. El principio de legalidad encuentra su fundamento constitucional en el artículo:

- a) 9.2
- b) 98
- c) 101
- d) 103

6. El artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en relación con la elaboración de disposiciones de carácter general establece que se sustanciará una consulta pública en la que se recabará la opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma, acerca de: (Indique la opción INCORRECTA)

- a) Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.
- b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
- c) La repercusión económica de la norma.
- d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias



7. El artículo 46.3 y 53.1 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, prevén la realización de una Memoria de Análisis de Impacto normativo. Según la Guía Metodológica para la elaboración de dicha Memoria, aprobada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2015, el informe de cargas administrativas, consistirá en:

- La identificación y cuantificación económica del coste que suponen las cargas administrativas para los destinatarios de la futura norma o su reducción.
- La evaluación de los costes y beneficios que la aprobación de la futura norma implicará para los destinatarios, así como la valoración del impacto económico de la imposición de nuevas cargas administrativas o su reducción.
- La evaluación del impacto económico y repercusión de la futura norma en los costes administrativos que soporta la Administración.
- La cuantificación económica de los costes administrativos que soportará la Administración con la aprobación de la futura norma o su reducción.

8. Conforme al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando intentada la notificación no se hubiese podido practicar:

- La notificación se hará mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o Comunidad Autónoma, pudiendo ser sustituido por un anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".
- La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Estado".
- La notificación se hará mediante publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia.
- La notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado, en el "Boletín Oficial del Estado", de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que proceda el acto.

9. Según el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, serán motivados: (Indique la opción INCORRECTA)

- Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
- Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o ampliación de plazos.
- Los que se dicten en ejercicio de potestades regladas.
- Los que se dicten en ejercicio de potestades discrecionales.

10. ¿Qué nombre recibe la regla o principio contenida en el artículo 65 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en virtud del cual si un acto nulo o anulable contiene los elementos constitutivos de otro distinto producirá los efectos de este último?

- Conservación de los actos administrativos.
- Transmisibilidad.
- Convalidación.
- Conversión de los actos viciados.

11. Señale la opción correcta respecto a la siguiente afirmación: "La nulidad o anulabilidad de un acto administrativo no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero" (artículo 64 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

- Verdadero, en virtud de la transmisibilidad del acto administrativo.
- Falso, en virtud del principio de comunicación de la invalidez de los actos administrativos.
- Verdadero, por conversión de los actos viciados.
- Falso, todos los actos dictados con posterioridad al mismo deben considerarse igualmente inválidos.



12. Según el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los siguientes casos: (Señale la opción INCORRECTA)

- a) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la jerarquía o el territorio.
- b) Los que tengan un contenido imposible.
- c) Los constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de estos.
- d) Los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

13. Conforme al artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, los ciudadanos tienen los siguientes derechos: (Señale la opción INCORRECTA)

- a) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento posterior al trámite de audiencia, que podrán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la resolución.
- b) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.
- c) Al acceso a la información pública, archivos y registros.
- d) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.

14. Según el artículo 3.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en sus relaciones con los ciudadanos, las Administraciones Públicas actúan de conformidad con los principios de:

- a) Transparencia y de participación.
- b) Eficiencia y servicio a los ciudadanos.
- c) Buena fe y de confianza legítima.
- d) Cooperación y colaboración.

15. Conforme al artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y al artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso a la información pública, archivos y registros podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: (señale la respuesta INCORRECTA)

- a) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
- b) Los intereses económicos y comerciales.
- c) La política económica y monetaria.
- d) La confidencialidad de los datos sanitarios personales de los pacientes.

16. Según el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, complete la siguiente afirmación: "La estimación por silencio administrativo tiene:

- a) Los solos efectos de hacer valer el acto administrativo tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica.
- b) Los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
- c) A todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
- d) A todos los efectos la consideración de acto administrativo confirmador del procedimiento.



17. Según el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, si el acto fuera expreso, el plazo de interposición del recurso de alzada contra el mismo será:

- a) De tres meses.
- b) De dos meses.
- c) De un mes.
- d) De 30 días.

18. De acuerdo con el artículo 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: (Señale la opción INCORRECTA)

- a) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de una infracción administrativa y se haya declarado mediante una resolución firme.
- b) Que al dictarlos se hubiera incurrido en un error de hecho.
- c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme.
- d) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

19. Según el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ¿se podrá prescindir del trámite de audiencia?

- a) Sí, cuando existan razones de urgencia apreciadas por el órgano competente para resolver el procedimiento, mediante resolución motivada.
- b) Sí, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
- c) No, en ningún caso.
- d) Sí, en el caso de que los interesados manifiesten su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, en cuyo caso no se tendrá por realizado el trámite.

20. Según el artículo 118.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el recurso extraordinario de revisión por error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente se interpondrá:

- a) Dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
- b) Dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
- c) Dentro del plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos.
- d) Dentro del plazo de cuatro años a contar desde el conocimiento de los documentos.

21. De conformidad con el artículo 125.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señale el plazo máximo para notificar la resolución de una reclamación previa a la vía laboral y el sentido del silencio administrativo en los casos en que transcurra dicho plazo sin haberle sido notificada resolución alguna:

- a) El plazo máximo para notificar la resolución es de tres meses y el sentido del silencio es estimatorio.
- b) El plazo máximo para notificar la resolución es de un mes y el sentido del silencio es estimatorio.
- c) El plazo máximo para notificar la resolución es de un mes y el sentido del silencio es desestimatorio.
- d) El plazo máximo para notificar la resolución es de tres meses y el sentido del silencio es desestimatorio.



22. Entre los derechos reconocidos a los ciudadanos, en relación con la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa, en el artículo 6.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, NO se encuentra el siguiente derecho:

- a) A elegir, entre aquellas que en cada momento se encuentren disponibles, la sede electrónica a través de la cual relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas.
- b) A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.
- c) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas.
- d) A obtener los medios de identificación electrónica necesarios.

23. De acuerdo con el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en relación con las condiciones de creación de sedes electrónicas por las Administraciones Públicas, en todo caso deberá garantizarse:

- a) Los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas, así como para el intercambio electrónico de datos.
- b) La identificación del titular de la sede, así como de los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
- c) La calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos, así como la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos.
- d) La identificación del titular de la sede y del punto de acceso electrónico.

24. De acuerdo con el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, los interesados pueden aportar al expediente copias digitalizadas de documentos siempre que la fidelidad con el original se garantice mediante la utilización de:

- a) Sello electrónico.
- b) Firma electrónica avanzada.
- c) Firma electrónica reconocida.
- d) Código seguro de verificación.

25. En virtud del artículo 3.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, se considera firma electrónica reconocida:

- a) La firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
- b) La firma electrónica constituida por un conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante.
- c) La firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma.
- d) La firma electrónica avanzada que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere.



26. De acuerdo con el artículo 54 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, sólo podrán contratar con el sector público:

- a) Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.
- b) Las personas naturales, españolas o extranjeras, y las personas jurídicas extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.
- c) Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en una prohibición de contratar y se encuentren debidamente clasificadas o, en los casos en que así lo exija esta Ley, acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
- d) Las personas naturales o jurídicas españolas, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas, así como las empresas no comunitarias en los términos del artículo 55.

27. Según el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no podrán contratar con las entidades previstas en su artículo 3 las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias: (Señale la INCORRECTA)

- a) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
- b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional o de falseamiento de la competencia, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.
- c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento o hallarse declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio.
- d) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

28. Según el artículo 180 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, cuando el órgano de contratación no se encuentre objetivamente capacitado para definir los medios técnicos aptos para satisfacer sus necesidades u objetivos, o para determinar la cobertura jurídica o financiera de un proyecto, podrá utilizarse como procedimiento de adjudicación:

- a) El procedimiento abierto.
- b) El procedimiento restringido.
- c) El procedimiento negociado.
- d) El diálogo competitivo.

29. Conforme al artículo 320 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la constitución de la Mesa de contratación será potestativa:

- a) En los procedimientos restringidos y negociados con publicidad a que se refiere el artículo 164.
- b) En los procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el artículo 177.1.
- c) En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación.
- d) En los procedimientos restringidos en que no sea necesario publicar anuncios de licitación.



30. Según el apartado segundo del artículo 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las entidades públicas empresariales tendrán, a los efectos de aplicación de esta Ley, la consideración de:

- a) Administración Pública.
- b) Poder adjudicador, no Administración Pública.
- c) No son poder adjudicador.
- d) Todas son falsas.

31. De acuerdo con el artículo 141 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, la cuantía de la indemnización se calculará con referencia:

- a) Al día en que la lesión se produjo.
- b) A la fecha en que se inició el procedimiento de responsabilidad patrimonial.
- c) Al día en que la reclamación de responsabilidad patrimonial efectivamente se interpuso.
- d) A la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad patrimonial.

32. En el caso de responsabilidad patrimonial concurrente de las Administraciones Públicas, el artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que:

- a) Las Administraciones intervinientes responderán en todo caso de forma solidaria.
- b) La responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo siempre a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención.
- c) El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones Públicas.
- d) Cuando la responsabilidad derive de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones la responsabilidad de cada una se fijará atendiendo a los criterios de competencia e intensidad de la intervención.

33. Conforme al artículo 21 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, en el procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, concluido el trámite de audiencia, la propuesta de resolución será formulada en un plazo máximo de:

- a) Diez días.
- b) Cinco días.
- c) Siete días.
- d) Quince días.

34. Conforme al artículo 145. 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: (señale la opción INCORRECTA)

- a) El resultado dañoso producido.
- b) La existencia o no de intencionalidad.
- c) La responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.
- d) La reiteración en los daños producidos.



35. Según el artículo 1 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, la Hacienda Pública Regional está constituida por:

- a) El conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración Pública Regional y a sus organismos autónomos.
- b) El conjunto de ingresos y gastos cuya titularidad corresponde a la Administración Pública Regional, a sus organismos públicos y demás entidades de derecho público.
- c) El conjunto de derechos económicos, recursos y rendimientos de su patrimonio cuya titularidad corresponde a la Administración Pública Regional.
- d) El conjunto de recursos procedentes del cumplimiento de las obligaciones económicas de sus órganos, los ingresos procedentes de los tributos y los rendimientos de su patrimonio.

36. Según el artículo 31.3 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, entre la documentación que deberá acompañar al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, NO se cita:

- a) Un informe económico y financiero.
- b) Los recursos y dotaciones de las empresas públicas regionales.
- c) Las Memorias explicativas de los contenidos de cada uno de ellos.
- d) La liquidación de los Presupuestos Generales del año anterior y un avance de la del ejercicio corriente.

37. Según el artículo 31 de la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la CARM, se entiende por evaluación de políticas públicas:

- a) El proceso integral de análisis de su conceptualización y diseño, de su proceso de ejecución, aplicación y seguimiento, así como de la valoración de los resultados e impactos conseguidos mediante dichas políticas.
- b) El sistema de evaluación de la gestión pública consistente en el análisis del diseño de planes y programas, de las actuaciones concretas de implantación y ejecución de dichos planes y programas, así como la medición de los impactos conseguidos.
- c) El proceso de evaluación de objetivos, indicadores de gestión y de seguimiento de planes y programas, así como su implantación.
- d) El análisis de la planificación integral y diseño de las políticas, de la implantación y ejecución de programas, la medición de objetivos, así como la ejecución de planes de mejora.

38. Según el artículo 32 de la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la CARM, señale la afirmación correcta sobre la evaluación de calidad de los servicios públicos de la Administración regional:

- a) Tiene como finalidad proporcionar a los poderes públicos información para la toma de decisiones, fomento de la transparencia, así como aumentar el grado de eficiencia de la labor administrativa e incremento de la productividad.
- b) Se articulará exclusivamente mediante procesos internos de autoevaluación implantados por los propios órganos administrativos y unidades administrativas que analizarán sus procesos y resultados.
- c) Se realizará mediante la aplicación de modelos de gestión de calidad reconocidos y comúnmente aceptados que permitan la comparación de resultados según las expectativas de los usuarios y el intercambio de experiencias entre los órganos administrativos sectoriales con competencias en materia de calidad.
- d) Comprende la medición del grado de cumplimiento de los compromisos de calidad establecidos en las cartas de servicios y en los acuerdos de nivel de servicio en relación con los servicios prestados a los ciudadanos.



39. Según el artículo 31 de la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la CARM, la evaluación de las políticas públicas atendiendo al momento en el cual se lleve a cabo podrá realizarse:

- a) En la fase de planificación o programación.
- b) En la fase previa.
- c) En la fase de definición de la demanda.
- d) En la fase de medición de resultados e impactos.

40 Según el artículo 32 de la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la CARM, señale cuál de los siguientes son niveles en los que se articula la evaluación de calidad de los servicios públicos de la Administración regional:

- a) Autoevaluación.
- b) Evaluación previa.
- c) Evaluación a posteriori.
- d) Evaluación de resultados.

41. Según el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal directivo es:

- a) El que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.
- b) El que desarrolla funciones expresamente calificadas de alta dirección en las relaciones de puestos de trabajo de las Administraciones Públicas.
- c) Aquel que es designado mediante el procedimiento de provisión de puestos de trabajo de libre designación.
- d) Aquel que desempeña puestos de trabajo señalados en las relaciones de puestos de trabajo con niveles 28 a 30.

42. La actividad directiva según Mintzberg puede agruparse en tres grandes áreas o responsabilidades a gestionar:

- a) La comunicación, la información y el liderazgo.
- b) El liderazgo, los roles informativos y la eficiencia.
- c) Las relaciones interpersonales, los roles informativos y la toma de decisiones.
- d) Ninguna de las anteriores.

43. ¿Cuál de las siguientes técnicas de análisis y definición de problemas surge bajo la premisa de que “el 20% de las causas determinan el 80% de los efectos”?

- a) Diagrama de Pareto.
- b) Diagrama causa/efecto de Ishikawa.
- c) Método Delfos.
- d) Análisis dimensional.

44. ¿Qué autor de la obra “The Practice of Management” propuso el sistema denominado “Administración por objetivos”?

- a) Peter F. Drucker.
- b) MacGregor.
- c) Taylor.
- d) Koontz.



45. En relación con el Código de Conducta de los empleados públicos, señale la respuesta correcta de conformidad con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) El Código de conducta de los empleados públicos está configurado por los principios éticos y de conducta regulados en la Constitución.
- b) Los principios éticos y de conducta informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.
- c) El Código de conducta está constituido por el catálogo de derechos y deberes de los empleados públicos.
- d) El Código de conducta está constituido por los principios legales y éticos recogidos en las leyes en materia de función pública.

46. Conforme a la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia, señale la afirmación correcta:

- a) Las administraciones locales determinarán como objetivo prioritario en sus Planes municipales de Igualdad de oportunidades, la creación de consejos intermunicipales de la Mujer.
- b) El Gobierno regional aprobará cada legislatura un Plan General de recoja las líneas de intervención y directrices para orientar la actividad de los poderes públicos murcianos en materia de igualdad de mujeres y hombres.
- c) Se crea el Observatorio de Igualdad como órgano colegiado de carácter consultivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- d) La Ley 7/2007 regula las competencias y funciones en materia de igualdad de mujeres y hombres de Administración Regional, de la Administración local y de las organizaciones y asociaciones privadas que se creen con esta finalidad.

47. Conforme al artículo 3 de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia, el principio de transversalidad comporta:

- a) Aplicar la perspectiva de género en las fases de planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas llevadas a cabo por las distintas administraciones públicas.
- b) Garantizar la coherencia, continuidad y optimización de los recursos en materia de igualdad de mujeres y hombres.
- c) La corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades por parte de los hombres y el reparto equilibrado de tareas.
- d) La ordenada gestión de competencias entre las distintas administraciones públicas en materia de igualdad de mujeres y hombres.

48. Conforme a la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia, señale la afirmación correcta:

- a) Las administraciones locales determinarán como objetivo prioritario en sus Planes municipales de Igualdad de oportunidades, la creación de consejos intermunicipales de la Mujer.
- b) El Gobierno regional aprobará cada legislatura un Plan General de recoja las líneas de intervención y directrices para orientar la actividad de los poderes públicos murcianos en materia de igualdad de mujeres y hombres.
- c) Se crea el Observatorio de Igualdad como órgano colegiado de carácter consultivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- d) La Ley 7/2007 regula las competencias y funciones en materia de igualdad de mujeres y hombres de Administración Regional, de la Administración local y de las organizaciones y asociaciones privadas que se creen con esta finalidad.



49. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres afirma en su artículo 8 que:

- a) Constituye discriminación indirecta por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.
- b) Constituye discriminación indirecta por razón de sexo todo trato favorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.
- c) Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado o no con el embarazo o la maternidad.
- d) Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.

50. El Pacto Mundial de la Naciones Unidas como una iniciativa internacional que sirve de marco para la Responsabilidad Social Corporativa, ¿Cuántos principios recoge?

- a) 5
- b) 10
- c) 17
- d) 20

51. La ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible:

- a) No hace mención a la Responsabilidad Social de las Empresas.
- b) Dedicar un artículo a la Responsabilidad Social de las Empresas.
- c) En todas las secciones hace mención a la Responsabilidad Social de las Empresas.
- d) Todas son correctas.

52. Según la teoría de motivación de Maslow, en la jerarquía de necesidades ¿cuáles son las primeras necesidades que actuarán como motivadoras de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación de las personas?

- a) Las de estima.
- b) Las de seguridad.
- c) Las fisiológicas.
- d) Las sociales.

53. Los autores Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton, en su obra "Getting to Yes: Negotiating Agreement without Giving in" presentan:

- a) Un método de trabajo en equipo.
- b) Una teoría sobre la motivación.
- c) Una técnica para la eliminación de barreras en la comunicación.
- d) Una técnica de negociación.

54. Señale la opción correcta respecto a los tipos de comunicación organizacional:

- a) Es ascendente cuando su finalidad es dirigir, coordinar y evaluar.
- b) La comunicación lateral suele darse entre jefes y subordinados.
- c) La comunicación descendente suele ser rápida.
- d) Ninguna de las anteriores.

55. El tipo de comunicación que se produce entre un directivo y un empleado que no depende jerárquicamente de éste es:

- a) Comunicación descendente.
- b) Comunicación en red.
- c) Comunicación diagonal.
- d) Comunicación ascendente.



56. ¿Qué norma regula la tramitación de quejas y sugerencias en la Administración Pública de la Región de Murcia?

- a) El Decreto 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia.
- b) El Decreto 28/1990, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Oficina de Servicio al Ciudadano.
- c) El Decreto 286/2010, de 5 de noviembre, sobre medidas de simplificación en los procedimientos administrativos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- d) La Orden de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de 25 de noviembre de 2010, por la que se regulan los servicios de orientación, atención y reclamación de los ciudadanos.

57. Señale la opción correcta en relación con el Cuadro de Mando Integral:

- a) Contempla en exclusiva la creación del capital intelectual, que es la perspectiva de aprendizaje y de crecimiento.
- b) La perspectiva financiera, no la tiene en cuenta y se centra en la perspectiva del cliente.
- c) Contempla y analiza no sólo indicadores financieros sino también indicadores estratégicos a largo plazo.
- d) Busca la flexibilidad de la empresa y se centra en la perspectiva del proceso interno.

58. Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración:

- a) Podrán ser desestimadas mediante resolución.
- b) Se concederá el acceso parcial a dicha información previa omisión de la información afectada.
- c) Se inadmitirán a trámite, previa resolución motivada.
- d) Podrán ser inadmitidas a trámite.

59. Conforme a la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ¿quién tiene entre sus funciones la de adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en la misma?

- a) El Director de la Oficina de la Transparencia y Participación Ciudadana.
- b) La Comisión Interdepartamental para la Transparencia.
- c) El titular de la consejería competente en materia de transparencia y participación ciudadana.
- d) El Presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia.

60. Según el artículo 18 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, señale cuál de las siguientes es una causa de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública:

- a) Que se refieran a informaciones que contengan datos personales de terceras personas.
- b) Que se refieran a informaciones relativas a la seguridad nacional y los intereses económicos y comerciales.
- c) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.
- d) Que se refieran a información que no tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones o resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.



61. Conforme a la Ley 14/2013, de medidas tributarias, administrativas y de función pública, las Cartas de Servicio son:

- a) Documentos que constituyen el instrumento de la Administración Pública de la Región de Murcia y sus organismos públicos para informar a los ciudadanos sobre los servicios que tienen encomendados.
- b) El instrumento interno de la Administración Pública de la Región de Murcia y sus organismos públicos para informar de los compromisos de calidad.
- c) Documentos que informan acerca de los procesos internos en los que intervienen la Administración Pública de la Región de Murcia y sus organismos públicos, así como de los compromisos de calidad y de los derechos de los ciudadanos y usuarios.
- d) Documentos que recogen los compromisos de calidad en la realización de actividades, actuaciones y trámites que forman parte de los procesos internos de la Administración Pública de la Región de Murcia y sus organismos públicos.

62. Conforme al artículo 17 de la Ley 14/2013, de medidas tributarias, administrativas y de función pública, señale la afirmación correcta relativa a los acuerdos de nivel de servicio:

- a) Los compromisos referidos en los acuerdos de nivel de servicio se publicarán en el BORM.
- b) Los compromisos referidos en los acuerdos de nivel de servicio se publicarán en el BORM y en la web corporativa.
- c) El cumplimiento de los compromisos contenidos en las Cartas de Servicio y los acuerdos de nivel de servicio se controlarán mediante cuadros de mando de seguimiento.
- d) Los acuerdos de nivel de servicio son documentos que recogen los compromisos de calidad en la prestación de servicios a los usuarios de los mismos.

63. Según el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, esta norma tiene por objeto:

- a) Aprobar un texto refundido en el que se integran las disposiciones en materia de régimen jurídico de los empleados públicos contenidas en normas con rango de ley.
- b) Establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación y determinar las normas aplicables al personal laboral.
- c) Determinar las normas aplicables a los empleados públicos y personal no laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
- d) Derogar todas las disposiciones de rango inferior que se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto Legislativo.

64. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público se aplica:

- a) Al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las Universidades Públicas.
- b) Al personal laboral de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
- c) A los Cuerpos de Policía Local siempre que lo disponga expresamente la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- d) Supletoriamente al personal funcionario de las Entidades Locales.

65. Según el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con el personal eventual señale la afirmación correcta:

- a) Es el que en virtud de contrato realiza funciones expresamente calificadas de confianza.
- b) Es retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para ese fin.
- c) El número máximo de este personal se regulará por la legislación que se dicte en desarrollo de este Estatuto.
- d) No le será de aplicación el régimen general de los funcionarios de carrera.



66. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es causa de pérdida de la condición de funcionario interino:

- a) Cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
- b) La no superación del proceso selectivo en el cual participe.
- c) El cese será libre.
- d) Cuando se produzca el cese de la autoridad que lo nombró.

67. De conformidad con el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, un funcionario declarado en situación de suspensión:

- a) Quedará privado durante el tiempo que permanezca en dicha situación del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición.
- b) Quedará privado durante 6 meses del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos de carácter retributivo.
- c) No podrá prestar servicios en la Administración Pública de la cual dependa pero sí en otras Administraciones Públicas.
- d) Determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando la suspensión exceda de tres meses.

68. Según el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la ejecución de la oferta de empleo público deberá desarrollarse dentro del siguiente plazo:

- a) Un plazo improrrogable de tres años.
- b) Un plazo de tres años prorrogable por un año.
- c) Un plazo improrrogable de dos años.
- d) Un plazo de un año.

69. Señale la opción correcta según el artículo 75 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, relativa a los cuerpos y escalas de funcionarios:

- a) Se crean, modifican y suprimen por Ley.
- b) Se crean por Ley de las Cortes Generales pero pueden ser modificadas por leyes de las asambleas legislativas de las CCAA.
- c) Se crean, modifican y suprimen reglamentariamente.
- d) Se crean, modifican y suprimen por las normas que se dicten por las Administraciones Públicas en desarrollo del Estatuto.

70. Respecto del Parlamento Europeo, indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

- a) Está compuesto por los jefes de Estado o de Gobierno de todos los países de la UE.
- b) Entre sus funciones está la de decidir sobre la orientación y las prioridades políticas generales de la UE.
- c) Es el órgano ejecutivo, políticamente independiente, de la UE.
- d) Es el órgano de la UE elegido por sufragio directo, con responsabilidades legislativas, de supervisión y presupuestarias.

71. Dentro del derecho derivado del ordenamiento comunitario, encontramos fuentes vinculantes y no vinculantes. Indique cuál de las siguientes fuentes tiene el carácter de NO vinculante:

- a) Reglamento.
- b) Decisión.
- c) Recomendación.
- d) Directiva.



72. El mercado interior único de la Unión Europea es un espacio sin fronteras interiores, en el que están garantizadas:

- a) La libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales.
- b) La libertad, seguridad y no discriminación.
- c) La neutralidad impositiva y el equilibrio presupuestario.
- d) Libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, así como la neutralidad impositiva y el equilibrio presupuestario.

73. En cuanto a la Política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, señale la afirmación correcta.

- a) Será ejecutada por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y por los Estados miembros.
- b) La adopción de actos legislativos se realizará por la Comisión.
- c) Será ejecutada por los Estados miembros siguiendo las directrices del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
- d) La definirá el Consejo Europeo, y las decisiones concretas serán adoptadas por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

74. ¿Cuál de los siguientes Fondos Europeos estará destinado a contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales dentro de la Unión mediante una participación en el desarrollo y en el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y en la reconversión de las regiones industriales en declive?

- a) Fondo Social Europeo.
- b) Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
- c) Fondo de Cohesión.
- d) Se trata de un destino común para todos los Fondos Estructurales.

75. La Estrategia Europa 2020 propone tres prioridades. De las siguientes opciones señale la correcta:

- a) Crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
- b) Convergencia, cooperación y cohesión.
- c) Cohesión económica, social y territorial.
- d) Política económica, monetaria y fiscal.

76. Según el Código Penal, la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, podría cometer un delito de:

- a) Prevaricación.
- b) Cohecho.
- c) Tráfico de influencias.
- d) Malversación.

77. Según el artículo 21 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa, el acuerdo de necesidad de ocupación:

- a) Habrá de ser declarado expresa y singularmente mediante Ley en cada caso.
- b) Cuando se trate de expropiaciones realizadas por el Estado se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la provincia respectiva y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.
- c) Se publicará en el Boletín Oficial iniciándose un periodo de información pública.
- d) Podrá ser objeto de recurso de reposición.



78. Según el artículo 66.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, relativo a la afectación demanial, con los requisitos establecidos en dicho artículo, NO surtirán los mismos efectos que la afectación expresa:

- a) La usucapión.
- b) La expropiación forzosa.
- c) La aprobación de planes o programas de actuación general.
- d) La incorporación de bienes y derechos del Estado.

79. Según el artículo 6 de la Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, NO son de dominio privado o patrimoniales de la Comunidad Autónoma:

- a) Los bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios públicos o para el ornato y decoración de las dependencias oficiales.
- b) Los derechos arrendaticios.
- c) Cualquier bien titularidad de la Comunidad Autónoma de Murcia y que no sea calificado de dominio público.
- d) Aquellos inmuebles propiedad de cualquiera de las entidades públicas integrantes del sector público regional que se destinen a oficinas o servicios administrativos.

80. Conforme al artículo 14 de la Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia, el Delegado de Salud y Consumo:

- a) Es un órgano de gestión junto al Gerente del Área y al Consejo de Salud de Área.
- b) Es un órgano de dirección junto al Consejo de Dirección y al Consejo de Salud de Área.
- c) Es un órgano de dirección y gestión junto al Consejo de Dirección y al Gerente del Área.
- d) Es un órgano de participación junto al Consejo de Salud de Área.

81. De acuerdo con el artículo 2 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Sistema Educativo Español contará con los siguientes instrumentos:

- a) La Administración educativa, el Consejo Escolar de Estado y los profesionales de la educación.
- b) El Consejo Escolar del Estado, la Conferencia Sectorial de Educación y las mesas sectoriales de negociación de la enseñanza pública y concertada.
- c) El Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio y el Sistema de desarrollo educativo.
- d) El Consejo General de Formación Profesional.

82. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 2/2007, de 12 de marzo, de Pesca Marítima y Acuicultura de la Región de Murcia, en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma, esta ley tiene como objeto la regulación de las siguientes materias:

- a) La pesca marítima y el abanderamiento de buques pesqueros.
- b) La iluminación de costas y señales marítimas y puertos pesqueros.
- c) La ordenación del sector pesquero profesional y ordenación de la actividad comercial de productos pesqueros.
- d) La planificación de la actividad económico-pesquera.

83. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, dentro de los Servicios Sociales de Atención Primaria que deben incluirse como mínimo, NO se incluye:

- a) El Servicio de Inserción Social.
- b) El Servicio de Atención en el Medio Familiar y Comunitario.
- c) El Servicio de Promoción y Cooperación Social.
- d) El Servicio de Atención a Personas Mayores.



84. El artículo 20 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, dentro de los instrumentos de ordenación del territorio, atribuye carácter excepcional a:

- a) Las Actuaciones de Interés Regional.
- b) Los Estudios de Impacto Territorial.
- c) Los Planes de Ordenación Territorial.
- d) Al Sistema Territorial de Referencia.

85. En la Región de Murcia, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, la aprobación de los Planes de protección del medio ambiente de ámbito sectorial corresponde:

- a) A la Asamblea Regional, mediante Ley.
- b) Al Consejo de Gobierno.
- c) A la Consejería competente en materia de medio ambiente.
- d) A la Dirección General competente en materia de medio ambiente.

86. Según artículo 20.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación del desempeño en:

- a) La promoción interna de los empleados públicos.
- b) La formación.
- c) El régimen de permisos de los empleados públicos.
- d) Las retribuciones básicas a percibir por los empleados públicos.

87. Según el artículo 24 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por:

- a) Las correspondientes Leyes de cada Administración pública.
- b) Las correspondientes Leyes de Presupuestos de cada Administración Pública.
- c) La correspondientes Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico.
- d) El Estatuto Básico del Empleado Público.

88. De acuerdo con el artículo 68 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la rehabilitación de la condición de funcionario:

- a) Se podrá solicitar por el interesado en caso de extinción de la relación de servicio como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó.
- b) Se podrá solicitar por el interesado en caso de extinción de la relación de servicio como consecuencia de renuncia a la condición de funcionario o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó.
- c) No se podrá solicitar por el interesado en caso de extinción de la relación de servicio como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o sanción disciplinaria de separación del servicio.
- d) No se podrá solicitar por el interesado en caso de extinción de la relación de servicio como consecuencia de haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación.



89. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las tasas son:

- a) Tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.
- b) Impuestos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público o privado que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.
- c) Tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.
- d) Tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.

90. Según el artículo 4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, señale la afirmación correcta referida a la potestad tributaria:

- a) La potestad originaria para establecer tributos corresponde al Estado y a las CCAA.
- b) Las CCAA y entidades locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con los principios generales establecidos en la Ley General Tributaria.
- c) Las demás entidades de derecho público podrán exigir tributos cuando una ley así lo determine.
- d) La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado. A las CCAA y entidades locales les corresponde exclusivamente la de exigir tributos.

91. Según la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, está cedido a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el rendimiento del:

- a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con carácter parcial, en el porcentaje del 33 por ciento.
- b) Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter parcial con el límite máximo del 50 por ciento.
- c) Impuesto sobre Sucesiones y donaciones.
- d) Impuesto sobre el Valor Añadido con el límite máximo del 58 por ciento.

92. ¿Qué ley da nueva redacción a la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia?

- a) La Ley 22/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
- b) La Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
- c) La Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- d) La Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.



93. Según el artículo 12 del Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales, el establecimiento de las tasas se realizará mediante ley en la que se regularán, al menos, los siguientes elementos:

- a) Hecho imponible, obligados al pago, devengo, cuota o elementos directamente determinantes de la deuda tributaria y exenciones y bonificaciones.
- b) Hecho imponible, obligados al pago, devengo, cuota y los elementos directamente determinantes de la deuda tributaria.
- c) Hecho imponible, sujetos pasivos, tipo de gravamen y causas de exención y reducciones de la cuota.
- d) Hecho imponible, sujetos pasivos, devengo de la tasa, base imponible y reducciones de la cuota.

94. El principio de unidad de caja del artículo 4 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, significa que:

- a) Se integrarán y custodiarán en el Tesoro Público Regional todos los fondos y valores de la Hacienda Pública Regional.
- b) Se integrarán y gestionarán todos los fondos y valores de la Hacienda Pública Regional en el Tesoro Público Regional, sin perjuicio de la existencia de cajas especiales en determinados organismos autónomos.
- c) Se gestionarán por el Tesoro Público Regional todos los derechos económicos de la Administración Regional.
- d) El Tesoro Público Regional comprende una sola caja para todas las entidades públicas radicadas en el territorio de la CARM.

95. Según el artículo 48 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, señale cuál de las siguientes es una fase del procedimiento de gestión de los créditos consignados en los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

- a) Autorización del compromiso del gasto.
- b) Disposición o compromiso del gasto.
- c) Ejecución del gasto.
- d) Propuesta de autorización.

96. Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, señale la afirmación correcta en relación con la función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de los caudales o efectos públicos:

- a) No corresponderá a la jurisdicción contable el enjuiciamiento de los asuntos atribuidos a la competencia del Tribunal Constitucional.
- b) No es una función propia del Tribunal de Cuentas.
- c) Conocerá de las cuestiones sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa.
- d) La jurisdicción contable es compartida con la de las CCAA.

97. Según el artículo 149.3 de la Constitución Española:

- a) Las normas estatales pueden prevalecer sobre las normas de las CCAA en determinadas materias.
- b) Las normas estatales prevalecerán sobre las de las CCAA en todos los supuestos de colisión de normas.
- c) Las normas de las CCAA prevalecerán en caso de conflicto sobre las del Estado, en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de las CCAA.
- d) Las normas estatales prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las CCAA, en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de las CCAA.



98. La cláusula de suplencia del Derecho estatal significa que:

- a) El Derecho estatal será supletorio del Derecho de las CCAA en caso de conflicto.
- b) El Derecho estatal será supletorio del Derecho de las CCAA en caso de concurrencia normativa.
- c) El Derecho estatal será supletorio del Derecho de las CCAA en los casos de cooperación entre los dos ordenamientos.
- d) El Derecho estatal será en todo caso supletorio del Derecho de las CCAA.

99. Según el artículo 60 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, los conflictos de competencia positivos que opongan al Estado y a una Comunidad Autónoma, podrán ser suscitados:

- a) Por el Estado y las asambleas legislativas de las CCAA.
- b) Por el Gobierno o los órganos colegiados ejecutivos de las CCAA.
- c) Por el Gobierno, los órganos colegiados ejecutivos de las CCAA y por las personas físicas o jurídicas interesadas.
- d) Por el Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado y por los órganos colegiados ejecutivos de las CCAA.

100. Según la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, la sentencia dictada en un conflicto en defensa de la autonomía local declarará:

- a) Si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, determinando, según proceda, la titularidad o atribución de la competencia controvertida, y resolverá, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones de hecho o de derecho creadas en lesión de la autonomía local.
- b) Si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, determinando, según proceda, la titularidad o atribución de la competencia controvertida. La resolución, en su caso, sobre las situaciones de hecho o de derecho creadas en lesión de la autonomía local requerirá nueva sentencia.
- c) Si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada. La determinación de la titularidad o atribución de la competencia controvertida, requerirá nueva sentencia si el Pleno decide plantearse la cuestión tras la resolución del conflicto declarando que ha habido vulneración de la autonomía local.
- d) La titularidad o atribución de la competencia controvertida, y resolverá, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones de hecho o de derecho creadas en lesión de la autonomía local.





CASO PRÁCTICO 1

Don José López, abogado, en representación de Doña Antonia Martínez presenta un escrito para solicitar una autorización para la plantación de viñedos en Jumilla. El escrito de solicitud lo presenta Don José López en el Registro General de la Consejería de Agricultura el día 1 de marzo de XXXX, ubicado en Ronda de Levante, Murcia. Al escrito de solicitud no se acompaña ningún documento.

Información adicional:

- Existe normativa específica reguladora de la presente autorización, un Decreto Regional en materia de autorizaciones para determinados cultivos. Dicho Decreto Regional establece que el órgano competente para la resolución del procedimiento es el Consejero competente en materia de agricultura. Si bien no contiene previsión alguna en cuanto al plazo máximo para la tramitación y resolución del mismo.
- El procedimiento a seguir para la tramitación y resolución de la autorización es el previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A la vista de lo anterior, responda a las siguientes cuestiones:

101. Al no adjuntar a la solicitud presentada acreditación alguna de la representación de Don José López, el órgano competente para la instrucción del procedimiento ¿qué actuación deberá realizar conforme al artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común?

- a) Concederá un plazo de 10 días para subsanar la falta de acreditación de la representación.
- b) Concederá un plazo de 10 días para la acreditación de la representación mediante la presentación de un poder notarial.
- c) Ninguna, pues considera que no es necesario acreditar la representación por tratarse de un acto de los mencionados en el artículo 32.3 de la Ley 30/1992.
- d) Concederá un plazo inferior a 10 días para subsanar la falta o insuficiente acreditación de la representación.

102. Al no acompañar a la solicitud ninguna documentación de la exigida en el Decreto Regional que regula la autorización, ¿qué actuación realizará el órgano competente?

- a) Dictará resolución en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procediendo al archivo de la solicitud.
- b) Conforme al artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, solicitará que se subsane la falta de presentación de los documentos preceptivos.
- c) Conforme al artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, solicitará que subsane la falta de presentación de documentación concediendo un plazo de 10 días para su presentación, ampliable hasta 5 en el caso de que la documentación a aportar proceda de otras Administraciones Públicas.
- d) Dictará resolución en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, teniendo por desistido al interesado de su petición.



103. En el caso de que el órgano competente requiera a Doña Antonia Martínez la presentación de documentación, señale la opción correcta de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 30/1992.

- a) Podrá alegar que tiene derecho a no presentarla porque la documentación requerida no es exigible de conformidad con el Decreto Regional que regula la autorización.
- b) Podrá alegar que tiene derecho a no presentarla porque dicha documentación ya se encuentra en poder del Ayuntamiento de Jumilla.
- c) Deberá presentar dicha documentación, y solo el caso de que se trate de documentos originales acompañará una copia de los mismos que será sellada.
- d) Deberá presentar la documentación original aun cuando el Decreto Regional no establezca expresamente que los mismos deban obrar en el procedimiento.

104. En el presente caso, ¿cuál es el plazo máximo que tiene la Consejería de Agricultura para resolver y notificar la resolución?

- a) Se desconoce.
- b) 6 meses.
- c) 4 meses.
- d) 3 meses.

105. En el presente caso, ¿desde cuándo se contará el plazo máximo para resolver y notificar la resolución?

- a) Desde el día 2 de Marzo.
- b) Desde el día 1 de Marzo.
- c) Desde la fecha en la que se dicte el acuerdo de inicio del procedimiento de autorización.
- d) Desde la fecha en la que Doña Antonia Martínez presente toda la documentación preceptiva.

106. ¿Podrá desistir Doña Antonia Martínez de su solicitud?

- a) No, deberá esperar a que finalice el procedimiento administrativo.
- b) Sí, y el órgano competente dictará resolución de desistimiento.
- c) Sí, y además por medio de Don José López sin necesidad de acreditar la representación.
- d) Sí, siempre que justifique que no es contrario al interés general ni daña a terceros.

107. La comprobación de los datos para determinar y conocer el cumplimiento de los requisitos necesarios para dictar la resolución de autorización en su caso, son:

- a) Actos de instrucción y se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento.
- b) Actos de ordenación del procedimiento y se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento.
- c) Actos de instrucción y su impulso corresponde a la persona que inicia el procedimiento.
- d) Actos de cumplimiento de trámites del artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

108. En el caso de que Doña Antonia Martínez pretenda proponer la práctica de una prueba en el procedimiento, señale la respuesta correcta de acuerdo con el artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

- a) No podrá hacerlo, ya que la prueba únicamente puede acordarse por el instructor del procedimiento y se practicarán aquellas que éste juzgue pertinentes.
- b) Podrá solicitarlo, si bien el instructor del procedimiento podrá rechazar la prueba propuesta por Doña Antonia mediante resolución sin necesidad de motivación.
- c) Podrá solicitarlo, si bien el instructor del procedimiento solo podrá rechazar la prueba propuesta por Doña Antonia cuando sea manifiestamente improcedente o innecesaria.
- d) Podrá solicitarlo, si bien el instructor del procedimiento solo podrá rechazar la prueba propuesta por Doña Antonia cuando no sea pertinente.



109. El Decreto Regional que regula la autorización prevé la emisión de informe preceptivo y determinante para la resolución que se dicte por el servicio de producciones agrícolas de la Consejería de Agricultura, sin establecer el plazo de emisión del mismo, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común el informe:

- a) Será evacuado en el plazo de 5 días.
- b) Será evacuado en el plazo de 7 días.
- c) Será evacuado en el plazo de 10 días.
- d) Será evacuado en el plazo de 15 días.

110. En el caso de que el informe señalado en la pregunta anterior no sea emitido en el plazo obligatorio, señale la opción correcta de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- a) Se paraliza la tramitación del procedimiento.
- b) Se solicitará nuevamente la emisión de informe.
- c) Se podrán proseguir las actuaciones.
- d) Se podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesivos.

111. En el caso de que el Consejero de Agricultura decidiera delegar su competencia para resolver en el Director General de Explotaciones Agrarias, ¿qué requisitos debería cumplir la delegación de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común?

- a) La delegación deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
- b) La competencia no podrá delegarse, al tratarse de una competencia relativa a la resolución de un procedimiento de autorización administrativa.
- c) La delegación de la competencia no podrá realizarse ya que el Decreto Regional que regula la autorización prevé como trámite preceptivo la emisión de informe.
- d) No podrá delegarse la competencia para resolver en el presente caso si en el procedimiento ya se ha emitido el informe preceptivo.

112. En el caso de que se acuerde un periodo de información pública, señale la opción correcta de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- a) Solo los interesados podrán formular alegaciones.
- b) Las alegaciones que se formulen se remitirán a Doña Antonia Martínez para que se manifieste sobre las mismas.
- c) Cualquier persona física o jurídica podrá examinar el procedimiento
- d) Solo podrán formular alegaciones otros productores de viñedo.

113. Dictada la resolución por el órgano competente, ¿en qué plazo debe ser cursada la notificación según el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común?

- a) 5 días.
- b) 10 días.
- c) 15 días.
- d) 20 días.



114. En el presente procedimiento los plazos señalados por días para la cumplimentación de trámites por Doña Antonia Martínez, se entiende que son:

- a) Hábil, excluyendo del cómputo los sábados y festivos.
- b) Hábil, excluyendo del cómputo los sábados y festivos en Jumilla.
- c) Hábil, excluyendo del cómputo los sábados y festivos en Murcia y en Jumilla.
- d) Hábil, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.

115. En el caso de que la resolución de concesión de la autorización se dictara por el Secretario General de la Consejería de Agricultura, ¿cómo se consideraría el acto?

- a) Perfectamente válido.
- b) Nulo de pleno derecho.
- c) Anulable, y podría ser convalidado por la Administración.
- d) Anulable, y podría ser revocado por la Administración.

116. ¿Cuál de los siguientes NO es contenido obligatorio de la notificación según el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común?

- a) El extracto de la resolución.
- b) Si el acto es o no definitivo en vía administrativa.
- c) Los recursos que procedan.
- d) Órgano y plazo para interponer los recursos.

117. Dictada la resolución por el órgano competente, ¿pone fin a la vía administrativa?

- a) Sí, conforme al artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- b) No, conforme al artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- c) Sí, conforme al artículo 28 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- d) No, conforme al artículo 28 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

118. En el caso de que Doña Antonia Martínez interponga recurso de alzada contra la resolución, ¿es correcta su calificación?

- a) Sí.
- b) No.
- c) Depende de la cuantía.
- d) Depende del motivo de impugnación.

119. ¿Qué requisito de los siguientes del escrito de interposición del recurso administrativo NO es preceptivo conforme al artículo 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común?

- a) Nombre y apellidos del recurrente.
- b) Acto que se recurre.
- c) Razón de la impugnación del acto.
- d) Órgano que dictó el acto impugnado.

120. ¿Puede Doña Antonia Martínez interponer recurso contencioso-administrativo?

- a) Sí, respecto de los actos que pongan fin a la vía administrativa.
- b) Sí, pero antes debe interponer recurso extraordinario de revisión.
- c) No, porque no está legitimada ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
- d) No, porque no tiene capacidad procesal.



121. En el caso de que Doña Antonia Martínez pudiera interponer recurso contencioso-administrativo, ¿cuál es el plazo de interposición?

- a) 1 mes.
- b) 2 meses.
- c) 3 meses.
- d) 6 meses.

122. En el caso de que Doña Antonia Martínez pudiera interponer recurso contencioso-administrativo, ¿podría conferir su representación a Don José López?

- a) Sí.
- b) No.
- c) Dependerá de si la actuación es ante un órgano unipersonal o ante un órgano colegiado.
- d) Dependerá de la cuantía del recurso contencioso-administrativo.

123. ¿Tiene carácter hábil el mes de agosto?

- a) No, para interponer recursos administrativos.
- b) Sí, para interponer recurso contencioso-administrativo.
- c) Sí, para el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en el ámbito contencioso-administrativo.
- d) Sí, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito contencioso-administrativo.

124. En el caso de que la resolución de concesión de la autorización contuviera un error de hecho y Doña Antonia Martínez solicitara al órgano competente una rectificación de errores, ¿sería correcto conforme al artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común?

- a) No, porque la rectificación de errores solo podrá instarse de oficio.
- b) Sí, porque la Administración podrá rectificar sus errores de oficio o a instancia de los interesados.
- c) No, porque la rectificación de errores tiene que acordarse antes de que el acto sea firme.
- d) Sí, porque la Administración podrá revocar sus actos.

125. En el caso de que Doña Antonia Martínez solicitara la revisión de oficio de la resolución de concesión por considerar que el acto es nulo, ¿Qué órgano sería competente para la revisión conforme al artículo 33 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia?

- a) El Consejero de Agricultura.
- b) El Consejero de Agricultura a propuesta del Consejo de Gobierno.
- c) El Consejo de Gobierno.
- d) El Consejo de Gobierno previo informe del Consejero de Agricultura.





CASO PRÁCTICO 2

El Director General de Centros e Innovación Educativa de la Consejería de Educación de la Administración Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el ámbito de las competencias de su centro directivo y de su Consejería, quiere realizar una serie de actuaciones encuadradas en un Plan Regional de Mejora de Infraestructuras, Equipamientos e Innovación Educativa. Las actuaciones consisten en la construcción de un edificio así como en el desarrollo de un programa de ayudas, y para ello le solicita a usted asesoramiento jurídico sobre las siguientes cuestiones:

- Construcción de un edificio para albergar un centro educativo cuyo presupuesto asciende a 5.250.000 euros, IVA incluido. Así como la contratación de la redacción del oportuno proyecto de obras.

- Desarrollo de un programa de ayudas para financiar actuaciones en materia de nuevas tecnologías de comunicación aplicadas a la educación.

126. ¿Qué instrumento jurídico-administrativo se formalizará para la construcción del edificio?

- a) Un convenio de colaboración entre la Consejería competente en materia de patrimonio y la persona física o jurídica que ejecute la obras.
- b) Un contrato de compraventa de bienes inmuebles conforme a la Ley de Patrimonio de la CARM.
- c) Un contrato administrativo sometido a la normativa de contratos del sector público.
- d) Un contrato administrativo especial sometido a derecho público.

127. En el caso de que se llevara a cabo la realización de las obras de construcción del centro educativo mediante un contrato administrativo ¿qué tipo de contrato debería celebrar la Administración Regional?

- a) Contrato de servicios constructivos.
- b) Contrato de concesión de obras públicas.
- c) Contrato de obras.
- d) Contrato de ejecución de obras por la Administración.

128. En el caso de que se lleve a cabo la redacción del oportuno proyecto de obras mediante un contrato administrativo, ¿qué tipo de contrato debería celebrar la Administración Regional?

- a) Contrato de consultoría y asistencia.
- b) Contrato de servicios.
- c) Contrato de gestión de servicios públicos.
- d) Contrato de asistencia técnica.



129. ¿Sería competente el Director General de Centros e Innovación Educativa de la Consejería de Educación para la celebración de un contrato administrativo?

- a) Sí, porque tiene la condición de órgano de contratación de la Administración Regional conforme al artículo 35 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- b) Sí, porque está comprendido dentro de una Administración Pública con la consideración de poder adjudicador.
- c) No, pero formará parte de la Mesa de contratación conforme al artículo 35 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- d) No, porque no es órgano de contratación conforme al artículo 35 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

130. En el caso de que se celebrara un contrato administrativo para la construcción de este centro educativo y se licitara mediante un procedimiento abierto, ¿cuál sería el órgano competente para la valoración de las ofertas según el artículo 320 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público?

- a) La Mesa de contratación.
- b) El Jurado de concursos de proyectos.
- c) El órgano que determine el Pliego de Cláusulas Administrativas.
- d) El órgano de contratación.

131. ¿El contrato administrativo que se celebrara para la construcción de éste centro educativo estará sujeto a regulación armonizada según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público?

- a) No.
- b) Si.
- c) Dependerá del precio de adjudicación.
- d) Se desconoce en el presente supuesto.

132. En el contrato administrativo que se celebrara para la construcción de este centro educativo, ¿sería correcta la publicación del procedimiento de adjudicación mediante anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) según el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público?

- a) Si, y además es obligatoria su publicación en el DOUE.
- b) Si, aunque su publicación en el DOUE dependerá de si el órgano de contratación lo estima conveniente.
- c) No, porque se trata de un contrato no sujeto a regulación armonizada.
- d) Sí, porque se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada.



133. ¿Podría la Administración Regional contratar con una empresa extranjera la construcción del centro educativo de conformidad con el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público?

- a) No, en ningún caso.
- b) No, pero excepcionalmente para el contrato de obras podrá hacerlo previa autorización del órgano de contratación.
- c) Sí, pero en el caso de Estados no pertenecientes a la Unión Europea será necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en España y estén inscritas en el Registro Mercantil.
- d) Dependerá de si el contrato está sujeto a regulación armonizada o no.

134. En cuanto a la selección del contratista del contrato administrativo que se celebrara para la construcción del centro educativo, en el caso de que el Director General de Centros e Innovación Educativa, le consultara a usted, si sería posible que cualquier empresario pudiera acudir a la licitación y que se tuvieran en cuenta una pluralidad de criterios para la selección del contratista. ¿Cuál sería su respuesta?

- a) Que si es posible.
- b) Que no es posible.
- c) Que si es posible para los contratos de obras en aquellos casos en los que no sea posible determinar la oferta económicamente más ventajosa.
- d) Que dependerá de los criterios de solvencia exigidos para la selección de candidatos.

135. ¿Cómo se aprobaría el expediente de contratación para la construcción del centro educativo según el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público?

- a) Mediante resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
- b) Mediante resolución motivada del Director General de Centros e Innovación Educativa aprobando el mismo y proponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
- c) Mediante orden del Consejero de Educación previa aprobación del Pliego de Cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas por el Director de las obras.
- d) Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno previa autorización por el Consejero de Educación y a propuesta del Director General de Centros e Innovación Educativa.

136. ¿Se requerirá para la adjudicación de la construcción del centro educativo el replanteo del proyecto según el artículo 126 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público?

- a) Solo para los procedimientos abiertos.
- b) No es requisito indispensable para la adjudicación de los contratos, sino para la ejecución de los contratos.
- c) Si, y el replanteo se realizará aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente de contratación de la obra.
- d) Si, porque el replanteo consistirá en la redacción de una memoria con los requisitos técnicos de la obra.



137. En el expediente de contratación para la construcción del centro educativo, ¿será necesario la aprobación del gasto?

- a) Sí, y salvo determinadas excepciones la resolución que apruebe el expediente de contratación implicará también la aprobación del gasto.
- b) No, porque la aprobación del gasto se realizará para la ejecución del contrato según lo dispuesto en el artículo 138 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- c) No, bastará con realizar una referencia a la partida presupuestaria.
- d) Sí, y se acreditará mediante certificado de procedencia del crédito presupuestario según el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

138. En el caso de que el programa de ayudas consista en la disposición dineraria a favor de personas públicas o privadas para financiar la realización de actuaciones en materia de nuevas tecnologías de comunicación aplicadas a la educación, respecto a su naturaleza jurídica, ¿a qué modalidad de actividad administrativa corresponde y en qué actuación se manifestará?

- a) Acción de fomento, mediante el otorgamiento de una subvención.
- b) Acción de fomento, mediante el otorgamiento de unos premios honoríficos dirigidos a distinguir las buenas prácticas en materia de nuevas tecnologías.
- c) Acción de servicio público, mediante un concierto educativo.
- d) Acción de fomento, mediante la concesión de beneficios fiscales a las entidades que realicen actuaciones en materia de nuevas tecnologías.

139. La Consejería de Educación decide otorgar una subvención destinada a financiar actuaciones en materia de nuevas tecnológicas de comunicación aplicadas a la educación, ¿qué procedimiento podrá seguirse para la concesión de la subvención según el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones?

- a) Concesión directa, en el caso de que se acrediten razones excepcionales de interés público-privado, social, económico o humanitario, y otras que debidamente justificadas dificulten su convocatoria pública.
- b) Concesión en régimen de concurrencia competitiva.
- c) Concesión directa prevista nominativamente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la que aparezcan la dotación presupuestaria y los beneficiarios determinados en el estado de ingresos del Presupuesto.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

140. En el caso de que la Consejería de Educación lleve a cabo la concesión de la subvención mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, ¿qué actuación deberá llevar a cabo para iniciar este procedimiento?

- a) La aprobación de una resolución de inicio del expediente de subvenciones.
- b) La aprobación de un Decreto de concesión de subvenciones.
- c) La tramitación de un Convenio para canalizar la subvención.
- d) La aprobación de la convocatoria por el órgano competente.

141. En el caso de la que Consejería de Educación haya aprobado una Orden por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la realización de actuaciones en materia de nuevas tecnologías de comunicación aplicadas a la educación, que NO contenga el crédito presupuestario al que se imputará la subvención, ¿qué consecuencia jurídica podría tener?

- a) Nulidad.
- b) Anulabilidad.
- c) Podría convalidarse.
- d) Ninguna.



142. Además, la Consejería de Educación mediante Orden del Consejero ha aprobado la convocatoria de subvenciones para la realización de actuaciones en materia de nuevas tecnologías de comunicación aplicadas a la educación, ¿podrían alegar los solicitantes de la subvención vicio de incompetencia para la aprobación de la convocatoria y, en su caso, en qué motivo se fundamentaría?

- a) No, porque los legitimados para alegarlo son los beneficiarios de la subvención.
- b) No, porque el Consejero es el órgano competente para la aprobación.
- c) Sí, porque el órgano competente para aprobar la convocatoria es el mismo que para conceder la subvención.
- d) Dependerá de la cuantía de la subvención.

143. La información sobre la convocatoria de las subvenciones para la realización de actuaciones en materia de nuevas tecnologías de comunicación aplicadas a la educación, ¿deberá remitirse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones?

- a) No, conforme al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- b) Si, conforme al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- c) No, solo será objeto de inclusión en el Plan Estratégico de Subvenciones.
- d) No, solo será objeto de publicidad en el Portal de Transparencia.

144. En este caso, en el que la Consejería de Educación ha aprobado una Orden de bases y otra orden de convocatoria de subvenciones para la realización de actuaciones en materia de nuevas tecnologías de comunicación aplicadas a la educación. ¿Cómo se entenderá iniciado el procedimiento de concesión de subvenciones?

- a) A instancia de parte mediante la presentación de solicitudes por los posibles beneficiarios de la subvención.
- b) A instancia de parte al tratarse de una subvención en régimen de concurrencia competitiva.
- c) De oficio.
- d) Podrá iniciarse de oficio y también a instancia de parte.

145. En el caso de que uno de los solicitantes de la subvención no acredite que cumple con los requisitos para ser beneficiario de la subvención establecidos en la Orden del Consejero por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de actuaciones en materia de nuevas tecnologías de comunicación aplicadas a la educación, ¿qué actuación realizaría el órgano competente?

- a) Requerirá al solicitante para que subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días conforme al artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- b) Iniciará una fase de preevaluación para verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención, conforme al artículo 24.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- c) En la fase de instrucción se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones conforme al artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- d) La Comisión evaluadora de la subvención propondrá la apertura de un trámite de subsanación de las solicitudes conforme al artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.



146. ¿La resolución de concesión de la subvención llevará aparejado un procedimiento de gestión presupuestaria?

- a) No.
- b) Si, y se realizará el documento contable A.
- c) Si, y se realizará el documento contable D.
- d) Si, y se realizará el documento contable OK.

147. En el presente supuesto, en el caso de que los solicitantes de la subvención no obtuvieran respuesta respecto a si se les ha concedido o no la subvención, ¿qué interpretación deberán realizar ante el silencio de la Administración Regional?

- a) Entenderán que su solicitud es desestimada.
- b) Entenderán que su solicitud es estimada.
- c) Dependerá de lo establecido en Orden de bases reguladoras respecto al silencio administrativo.
- d) Dependerá de lo establecido en la Orden de convocatoria respecto al silencio administrativo.

148. En el caso de que uno de los beneficiarios de la subvención que ha recibido la cantidad de 7.500 euros, posteriormente incumpliera uno de los compromisos exigidos en las bases reguladoras, procederá:

- a) El inicio de un procedimiento de revisión de oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- b) La declaración de lesividad y ulterior impugnación de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- c) La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulabilidad y la obligación de reintegrar las cantidades percibidas.
- d) El inicio de un procedimiento de reintegro.

149. ¿Podrá iniciarse un procedimiento sancionador en materia de subvenciones en el caso de que uno de los beneficiarios haya recibido la cantidad de 2.000 euros falseando las condiciones requeridas para su concesión?

- a) Si, por la comisión de una infracción muy grave.
- b) Si, por la comisión de una infracción leve.
- c) No, porque procederá el inicio del procedimiento de reintegro.
- d) No, porque será materia objeto de verificación en el control financiero de la subvención.

150. En el caso de que el control financiero de la subvención se inicie por Orden del Consejero de Educación, ¿sería éste el órgano competente y la forma de iniciarlo?

- a) No.
- b) Si.
- c) Dependerá de la cuantía de la subvención.
- d) No porque corresponderá en exclusiva al Tribunal de Cuentas.

**PLANTILLA DEFINITIVA CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES
(PROMOCIÓN INTERNA)**

OPCIÓN JURÍDICA

1	b	44	a	87	a	130	a
2	a	45	b	88	a	131	a
3	d	46	b	89	d	132	b
4	d	47	a	90	c	133	c
5	d	48	anulada	91	c	134	anulada
6	anulada	49	d	92	a	135	a
7	a	50	b	93	a	136	c
8	b	51	b	94	a	137	a
9	c	52	c	95	b	138	a
10	d	53	d	96	a	139	b
11	a	54	d	97	d	140	d
12	a	55	c	98	d	141	d
13	a	56	a	99	b	142	b
14	a	57	c	100	a	143	b
15	d	58	c	101	a	144	c
16	c	59	anulada	102	b	145	a
17	c	60	c	103	a	146	c
18	a	61	a	104	d	147	a
19	b	62	c	105	b	148	d
20	b	63	b	106	b	149	a
21	c	64	a	107	a	150	a
22	a	65	b	108	c		
23	b	66	a	109	c		
24	b	67	a	110	d		
25	c	68	a	111	d		
26	a	69	a	112	c		
27	d	70	d	113	b		
28	d	71	c	114	d		
29	c	72	a	115	c		
30	anulada	73	a	116	a		
31	a	74	b	117	c		
32	c	75	a	118	b		
33	b	76	b	119	d		
34	d	77	b	120	a		
35	a	78	d	121	b		
36	b	79	d	122	anulada		
37	a	80	c	123	c		
38	a	81	b	124	b		
39	a	82	c	125	c		
40	a	83	d	126	c		
41	a	84	a	127	c		
42	c	85	b	128	b		
43	a	86	b	129	d		

